

**PRINCIPALES MODIFICACIONES EN EL ORDEN PENAL OPERADAS POR LA LEY 37/2011
DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL.**

El núcleo de la reforma procesal penal aprobada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, se contrae exclusivamente, como el propio legislador señala en la Exposición de Motivos de la citada norma, a la necesaria adaptación de la normativa adjetiva criminal a las especificaciones de la reforma Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introdujo en nuestra normativa la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

COMPETENCIA: En primer lugar la norma específica el régimen de competencia de los Tribunales del orden penal, - nuevo artículo 14 bis de la LECrim. - especificando que la competencia para el enjuiciamiento de las personas jurídicas vendrá fijada, en los supuestos que ésta se determine por la gravedad de la pena, por la que pudiera corresponder a la personas físicas.

DERECHO DE DEFENSA: Art. 119 de la LECrim. Se concreta el derecho a la defensa de las personas jurídicas, indicando que a las mismas en la primera citación para la comparecencia del art. 775 del Texto procesal Criminal se las requerirá para el nombramiento de un **representante**, así como Abogado y Procurador, con la advertencia de que si estos últimos no son designados se efectuará la designación de oficio. La propia norma señala que todos las posteriores trámites procedimentales y de investigación se entenderán con el representante especialmente designado y de no proceder a su designación, o habiéndose procedido a la misma el representante no asistiera a dichas diligencias, las mismas se podrán practicar con la exclusiva presencia del Abogado defensor, incluido la celebración del juicio oral que exige, igualmente, la presencia del Procurador designado. Entre las novedades que podemos destacar es

que la designación de postulación exige el nombramiento de Procurador, exigencia legal que difiere del enjuiciamiento de las personas físicas en que la designación de Procurador sólo es exigible a partir de que se dicte auto de apertura del juicio oral, actuando previamente el abogado también como representante procesal (art. 768 LECrim). La ratio legis de tal exigencia se encuentra en el nuevo art. 119 nº 1 d) de la LECrim. que indica **que la designación de Procurador sustituirá a la designación de domicilio por parte de la mercantil a efectos de notificaciones**, practicando el órgano judicial con el Procurador todas las comunicaciones, incluidas las notificaciones personales.

CONFORMIDAD: Se especifica en el nuevo apartado 8 del artículo 787 de la LECrim. que cabe la conformidad de la persona jurídica en el juicio oral con la petición acusatoria, conformidad que deberá prestar el representante especialmente designado, por la entidad societaria cuyo contenido no vinculará a los demás acusados, señalar que en ningún caso el Abogado y/o Procurador de la persona jurídica podrán suplir el acto personalísimo de declaración de conformidad.

REBELDÍA: El nuevo art. 839 bis de la LECrim. regula un único supuesto de rebeldía procesal de las personas jurídicas, rebeldía derivada de la imposibilidad de efectuarse la primera citación para la comparecencia del art. 775 de la LECrim. por falta de domicilio social conocido, con publicación de la oportuna requisitoria en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. No existen otros supuestos de posible rebeldía habida cuenta que una vez citada la entidad societaria para la comparecencia del art. 775 de la LECrim. la falta de nombramiento del representante especialmente designado, o de ser nombrado, sus posteriores incomparecencias –art. 835 LECrim.-, serán suplidas por la notificación al Procurador.

En suma, la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal derivada de la reforma del Código Penal pretende soslayar los problemas derivados de la incriminación, instrucción y enjuiciamiento de un ente colectivo que, sin perjuicio de que sea titular de personalidad jurídica y por lo tanto contar con órganos rectores que la representan y que rigen la vida societaria, su comparecencia en la instrucción de un procedimiento penal podría ocasionar múltiples disfunciones procesales de ahí que se cree *ex novo* la figura procesal penal del *representante especialmente designado*, figura que representa a la persona jurídica, no a sus órganos rectores, y en consecuencia, podrá ser designada como tal personas físicas totalmente ajenas a la propia persona jurídica y, finalmente, previendo el Legislador la posibilidad de falta de designación del representante opta por dar validez a los actos procesales penales con el exclusivo requisito de la presencia del Abogado - *ad exemplum* art. 119, nº 1 b) y c) y art. 120 de la LECrim. - o con la notificación al Procurador